

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

EC-T1368

CERTIFICACIÓN

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el **Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)**, de conformidad con la comunicación de fecha 15 de junio de 2017 suscrita por Kai Hertz (ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de **US\$250,000** para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4) meses calendario contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares estadounidenses. Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

Original Firmado

*Oct 13,
2017*

Sonia M. Rivera
Jefe

Fecha

Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento
ORP/GCM

APROBADO:

Original Firmado

*Oct 13,
2017*

Carlos Santiso
Jefe de División
División de Capacidad Institucional del Estado
IFD/ICS

Fecha

Documento de la Cooperación Técnica

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Ecuador/CAN
▪ Nombre de la CT:	Automatización de procesos judiciales
▪ Número de CT:	EC-T1368
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Mauricio García Mejía (ICS/CEC), Jefe de Equipo; Nathalie Alvarado, Melissa Gonzalez (IFD/ICS); Marcela Hidrovo, Gumersindo Velásquez (FMP/CEC); Mariela Sánchez (CAN/CEC); y Javier Jimenez (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente - CS
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	15 de junio de 2017
▪ Beneficiario:	República del Ecuador, a través del Consejo de la Judicatura (CJ)
▪ Agencia Ejecutora:	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS)
▪ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$250.000
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso:	30 meses
▪ Fecha de Inicio requerido:	Octubre 2017
▪ Tipos de consultores:	Consultores individuales y firmas consultoras
▪ Unidad de Preparación:	División de Capacidad Institucional del Estado (IFD/ICS)
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	CAN/CEC
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	N
▪ CT incluida en CPD (s/n):	S
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Fortalecimiento de la Capacidad institucional y el Estado de Derecho

II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Durante la última década, la administración de justicia ecuatoriana ha sufrido importantes cambios. Dentro de los más destacados se encuentra la modificación de dos normas que son las que definen los procedimientos a través de los cuales se prestan los servicios judiciales: El Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), que cubre toda la materia no penal. Ambas normas cambiaron la forma en que se administra justicia en el país, y buscaron la introducción de la oralidad en la prestación de servicios que tradicionalmente han sido escritos, desarrollando un sistema de justicia basado en audiencias.
- 2.2 La oralidad es la forma de tramitación que permite tener una mejor y mayor interacción entre las partes procesales y el juzgador, quien decide en audiencia sobre el asunto que se ha elevado a su conocimiento. La motivación para implementar este modelo de tramitación es dotar de celeridad, agilidad, eficiencia, transparencia a la gestión de los administradores de justicia, de manera que los usuarios verifiquen el cumplimiento irrestricto de los plazos y tiempos procesales, teniendo una decisión judicial que no se dilaten por la interposición de múltiples argumentos dilatorios que van en desmedro del verdadero sentido de la justicia.

- 2.3 El objetivo detrás de la implementación de la oralidad no es sólo eliminar el uso del papel, sino sobre todo proveer un servicio de calidad, ágil, eficiente. Para lograr este objetivo, es necesario acompañar las reformas procesales con la introducción de tecnologías digitales en el sector, a fin de proveer de comunicaciones inmediatas y seguras, contar con herramientas que permita llevar un registro y control de cada actividad judicial, y que finalmente se produzcan datos que faciliten el análisis de impactos tanto en la duración del proceso, como en la evaluación de jueces y otros funcionarios, tiempos de atención al usuario, etc. Es por esto por lo que estos cuerpos normativos fortalecen la gestión judicial también a través de la tecnología, creando el expediente electrónico¹ y la posibilidad de realizar transacciones en línea de procesos judiciales.
- 2.4 El Código Orgánico de la Función Judicial señala que “tendrán la validez y eficacia de un documento físico original los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales”, estableciendo adicionalmente que “el Consejo de la Judicatura (CJ) dictará los reglamentos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados medios; para garantizar su seguridad, autenticidad e integridad; así como para posibilitar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos, conforme a la ley.”
- 2.5 A fin de llevar a la práctica este mandato legal, el CJ² ha implementado un piloto de expediente judicial electrónico (e-SATJE³), el cual permite la gestión de los procesos judiciales sin la necesidad del expediente físico, dado que los procesos nuevos se encontraban completamente digitalizados, por lo que es posible visualizarlos y gestionarlos electrónicamente.
- 2.6 El nuevo sistema, incorpora novedades importantes que facilitan la coordinación entre diferentes agencias de seguridad y justicia (CJ, Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública, Corte Nacional y Ministerio de Justicia) y la prestación de servicios judiciales, como por ejemplo la posibilidad de presentar electrónicamente peticiones que dan inicio al proceso judicial (demandas vía web), gestión y seguimiento gráfico de los diferentes pasos en el proceso judicial, alertas de tiempos procesales por caducar, agendamiento y grabación de audiencias, notificaciones electrónicas a las partes procesales, generación de órdenes de detención y boletas de excarcelación electrónica, herramientas para el cálculo de pensiones y otras liquidaciones de costos en los juicios, consultas de las causas completas por vía web, medios apoyar al juez en la toma de decisiones poniendo a su disposición fácilmente jurisprudencia, plantillas para las resoluciones y otras informaciones necesarias para tomar decisiones, etc. Sin embargo, luego de realizar una prueba piloto desde 2015 en la Provincia de Imbabura, se observó que el sistema no estaba siendo utilizado, en su totalidad, por las partes, lo que

¹ El expediente judicial electrónico se define como el conjunto de documentos electrónicos asociados a un procedimiento judicial. Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Grupo Tecnologías de Información, XVII Edición Cumbre Judicial. “Borrador de Guía de Interoperabilidad y Seguridad de Expediente Judicial Electrónico.”

² La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 178 señala que: “...El CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.”

³ El expediente judicial electrónico en el CJ es soportado/atendido a través del “Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano”, cuya nueva versión se la denomina “e-SATJE”

impedía lograr las mejoras en los tiempos de tramitación y facilitación del acceso a los servicios judiciales a las partes.

- 2.7 **Impacto en el desarrollo.** La automatización de los procesos judiciales contribuye a reducir las barreras de acceso a la justicia y a consolidar el Estado de derecho⁴. Esto es así, por cuanto la automatización otorga mayor confiabilidad, disponibilidad y conservación de los expedientes judiciales⁵. Asimismo, contribuye a una mayor celeridad a los procesos judiciales al facilitar la manipulación virtual del expediente electrónico las 24 horas del día, tanto por parte de los servidores judiciales como de los abogados en libre ejercicio y la ciudadanía sin comprometer la seguridad del mismo⁶. Esta automatización también facilita el intercambio de información entre las distintas entidades⁷ mediante el uso del bus integrado de servicios, lo que a su vez simplifica los trámites judiciales para el ciudadano y contribuye a mejorar la calidad del servicio⁸.
- 2.8 Esta CT se orienta a mejorar la la calidad⁹ de los servicios judiciales y de seguridad, reduciendo las limitaciones en la implementación de e-SATJE y otros medios tecnológicos que finalmente derivan en una mejor calidad de la prestación de servicios. Estas limitaciones se deben a los siguientes factores causales principales:
- 2.9 **Factor Causal 1.- Dificultades en la coordinación e intercambio de información entre los sistemas de las entidades que forman parte de la cadena de valor de los servicios judiciales y de seguridad.** Si bien la coordinación es naturalmente difícil en el sector de seguridad y justicia por la diversidad de entidades involucradas y por las autonomías de las mismas, se observan algunos factores que hacen aún más compleja esta coordinación, en particular destacan: (i) inexistencia de reglas para regular la interoperabilidad entre las entidades del sistema de administración de justicia (técnicas, semánticas, legales, de procesos); (ii) a pesar que la información en el sector público, por mandato constitucional es pública, existe un marco regulatorio en la legislación ecuatoriana que protege a las personas víctimas de ciertos delitos, así como también demanda la protección

⁴ Carlos E. Jimenez-Gómez (2017). "Hacia el Estado abierto: justicia abierta en América Latina y el Caribe", en: Naser et. al., "*Desde el gobierno abierto al Estado Abierto en América Latina y el Caribe*", pp 231-250. CEPAL.

⁵ Para una revisión de los diferentes beneficios asociados a los diferentes niveles de sofisticación posibles en materia de sistemas electrónicos de gestión de casos judiciales, Rooze, Edwin "*Differentiated Use of Electronic Case Management Systems*", "*International Journal for Court Administration*", Nov. 2010.

⁶ McMillan, James; Walker, Douglas; Lawrence Webster (1998). "*A Guidebook for Electronic Court Filing*".

⁷ Un sistema de gestión de casos judiciales puede integrarse con sistemas informáticos relacionados para recuperar datos relevantes e incorporar esos datos en el sistema. Esta integración proporciona el beneficio obvio de reducir el tiempo de entrada de datos para los usuarios. Además, al traer los datos directamente desde los sistemas de datos de origen, los errores de entrada de datos pueden minimizarse, y esto maximiza el valor recibido de esos sistemas también. Slowes, Richard (2012). "[Benefits of a Modern Court Case Management System](#)". [White Paper. Thompson Reuters](#).

⁸ "La interoperabilidad y, en consecuencia, las soluciones desarrolladas o puestas en práctica... son fundamentales para el pleno aprovechamiento del potencial de la administración y la democracia electrónicas al permitir la apertura de ventanillas únicas y la prestación de servicios públicos de extremo a extremo y transparentes que redunden en unas menores cargas administrativas y unos costes más reducidos." [DECISIÓN \(UE\) 2015/2240 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO](#) de 25 de noviembre de 2015, por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público.

⁹ Nos referimos acá por "calidad" principalmente a los atributos de "tiempo de duración" y "facilidad de acceso" a los servicios judiciales.

de la información de los menores de edad. Esto deriva en un control especial que debe ser implementado por parte de las instituciones públicas custodias de estos datos, que podrían convivir con la información pública que se requiere compartir y exponer; y (iii) proliferación de canales bilaterales de comunicación bilateral entre entidades. Esta multiplicidad de canales ha conllevado a un intercambio de información desorganizado, que ha derivado en la implantación de procesos complejos e inseguros, que a su vez aumentan el riesgo de violentar la información que se pretende precautelar. Esta problemática se agrava cuando consideramos que se prevé extender el expediente electrónico a más provincias, así como también en aumentar la funcionalidad del mismo, lo que generaría más información digitalizada, y que en su momento demandará que sea compartida con usuarios y otras entidades, con todos los cuidados y conveniencia expuesta.

- 2.10 **Factor Causal 2.- Resistencia al cambio de las partes procesales en el uso de medios electrónicos en la gestión judicial.** Si bien la resistencia al cambio es un fenómeno conocido y que puede afectar seriamente la implementación de soluciones digitales en cualquier contexto, las entidades del sistema de seguridad y justicia presentan algunas características que agravan este problema. El piloto de implementación del e-SATJE en la Provincia de Imbabura, permitió identificar las siguientes fuentes de resistencia: (i) Los funcionarios judiciales tienen un sentido de propiedad sobre los expedientes judiciales físicos. En este sentido, los ayudantes judiciales son quienes reciben las peticiones escritas para su gestión. El sistema no le permite al juez un control efectivo sobre los procesos. Los jueces despachan de acuerdo al orden en que sus auxiliares ponen a su conocimiento los expedientes debidamente organizados, es decir, son estos últimos quienes establecen la prelación de atención de peticiones. (ii) Fuerte cultura basada en el uso del papel. El papel le da seguridad al funcionario judicial y sobre esa seguridad da continuidad al proceso judicial y lo resuelve. En esta línea, toda la gestión judicial se realiza sobre el papel, el papel que en forma de prueba documental aportan las partes procesales y las que genera el operador jurisdiccional. Al momento no se ha empoderado la idea de la gestión judicial a través de documentos digitales y digitalizados. Este problema se identifica también en los usuarios externos, quienes siempre requieren una constancia física de la presentación de cualquier documento, incluso si la misma les fuese enviada a sus domicilios electrónicos. Toda gestión judicial se realiza sobre el expediente físico o no se realiza. Estas circunstancias se encuentran profundamente arraigadas en la forma de gestión judicial, la misma que debe cambiar, tanto para mejorar el acceso a la justicia como la efectiva garantía de derechos. (iii) Resistencia a la mayor supervisión del trabajo judicial que se derivaría del control de los flujos de trabajo a través del sistema (sistema de alertas).
- 2.11 Por tanto, el **objetivo general** que persigue esta CT es mejorar la calidad de los servicios judiciales y de seguridad, a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del CJ para: (i) gestionar eficientemente el intercambio de información entre las entidades prestadoras de servicios judiciales y de seguridad; y (ii) gestionar la resistencia al cambio por la introducción de medios tecnológicos en la prestación de servicios judiciales.
- 2.12 La CT es consistente con: (i) la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 (AB-3008), al contribuir con el tema transversal de capacidad institucional y Estado de Derecho, por contribuir con la mejora de los servicios públicos (en particular los de justicia y seguridad), la celeridad de los procesos judiciales, y el

mayor acceso a la justicia por canales virtuales¹⁰; (ii) las Metas Regionales de Desarrollo del GCI-9 de apoyar a países pequeños y vulnerables y beneficiar a ciudades con programas de seguridad; (iii) la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2); (iv) las Guías operativas para el Diseño y Ejecución de Programas en Seguridad Ciudadana (GN-2535); y (v) las Guías Operativas para un Mejor Desempeño de los Sistemas de Administración de Justicia (GN-2643). Es también consistente con el Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS) (GN-2819-1), al contribuir a los resultados de: (i) fortalecimiento de la capacidad de implementación y entrega de servicios; y de (ii) fortalecimiento de la capacidad para la innovación tecnológica para mejorar la calidad de las instituciones y la implementación de políticas.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

- 3.1 Componente 1.- Plataforma de interoperabilidad para los servicios judiciales y de seguridad (US\$93,000).** El objetivo de este componente es fortalecer la capacidad institucional del CJ para gestionar eficientemente el intercambio de información por medio de una plataforma virtual entre las entidades prestadoras de servicios judiciales y de seguridad¹¹. Para ello, se financiarán las siguientes actividades: (i) diagnóstico de la situación de interoperabilidad entre las entidades de la cadena de valor de los servicios judiciales y de seguridad, incluyendo una propuesta de nuevo modelo de gobernanza para el intercambio de información entre las entidades del sector de justicia y seguridad; (ii) desarrollo de la normativa (marco regulatorio) que contenga un estándar nacional de interoperabilidad entre los servicios judiciales y de seguridad (técnicos, semánticos, legales, de procesos); (iii) talleres de capacitación sobre el nuevo marco regulatorio; y el (iv) diseño de las especificaciones técnicas del bus integrado de servicios del sector justicia y seguridad (plataforma tecnológica que facilita el intercambio de información de manera automatizada entre las entidades del sector de seguridad y justicia¹²), así como la correspondiente identificación de necesidades de capacitación para su uso, cuya adquisición e implantación sería financiado posteriormente con un proyecto de inversión.
- 3.2 Componente 2.- Gestión del cambio para la implementación de la gestión judicial a través de medios electrónicos (US\$97,000).** El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades institucionales del CJ para gestionar la resistencia al cambio de las partes procesales ante el uso de medios electrónicos

¹⁰ Esta CT contribuye con los indicadores 12 (Eficacia Gubernamental) y 13 (Estado de Derecho) del CRF, que miden variables como la percepción de los servicios gubernamentales y la eficiencia de las cortes.

¹¹ Las instituciones con quienes se interactuarán son: Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía, Corte Nacional, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, organizaciones que designarán a la autoridad competente para trabajar en el proyecto. Esta interacción se dará en el marco de la Mesa de Justicia, mecanismo de articulación interinstitucional liderado por el CJ para temas diversos. En el futuro se podrá considerar las demandas de interoperabilidad de instituciones externas al sector justicia. El mecanismo de coordinación será a través del Gerente del proyecto, quien incluirá en la planificación de detalle del proyecto todas las actividades que deriven en el adecuado diseño del bus de servicios las cuales serán puestas en conocimiento de las otras entidades en el marco de la Mesa de Justicia para su implementación.

¹² La apropiación de la plataforma diseñada se dará a través de talleres de transferencia de conocimiento, así como también con el acompañamiento para la puesta en marcha de un ejemplo piloto, que se realizará a los técnicos del CJ (como órgano encargado del gobierno y administración del sector Justicia), quienes a futuro serán los encargados de operar y dar el mantenimiento a la plataforma, posterior a su implantación.

en la gestión judicial. Para ello, el componente financiará las siguientes actividades: (i) diagnóstico sobre resistencia al uso de medios tecnológicos en los servicios judiciales; (ii) formulación de un plan de gestión del cambio; (iii) desarrollo de un manual de aplicación que contenga una estructura institucional para la implementación de la estrategia de gestión del cambio en el CJ; (iv) actividades de implementación de la estrategia de gestión del cambio, que incluye actividades de capacitación como la formación de un equipo de formadores internos del CJ en gestión del cambio, formación de líderes de implementación del plan de gestión del cambio en las diferentes cortes provinciales del país, el desarrollo de destrezas y habilidades en procesos orales utilizando medios electrónicos, así como otras pasantías, talleres o cursos que se identifiquen en el plan.

- 3.3 **Componente 3.- Evaluación, difusión y retroalimentación de resultados (US\$60,000).** El objetivo de este componente es asegurar la adecuada documentación y difusión regional de los resultados, así como la obtención de retroalimentación por parte de expertos regionales sobre las actividades. Debido a la novedad de las actividades acá financiadas, y a lo común de la problemática tratada en la CT, este componente financiará: (i) el monitoreo, documentación y difusión de los resultados alcanzados; (ii) una evaluación de resultados que identificará lecciones aprendidas y propondrá recomendaciones concretas derivadas de la ejecución y en el cumplimiento de los objetivos previstos con esta CT; y (iii) un taller regional para promover el conocimiento y eventualmente la adopción de estos estándares, por los diferentes sistemas judiciales y de seguridad de la región. Dicho taller permitirá recoger la retroalimentación de expertos internacionales sobre los resultados de la CT, lo que a su vez retroalimentará las regulaciones desarrolladas con el apoyo del componente 1.
- 3.4 El costo total del proyecto es de US\$250,000, los cuales serán financiados por el BID con recursos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Instituciones Financiado con Capital Ordinario (INS).

Tabla 1. Presupuesto Indicativo

Descripción	BID/Financiamiento por Fondo	Contrapartida	Actividad / Componente
Componente 1.- Plataforma de interoperabilidad para los servicios judiciales y de seguridad	93.000	0	93.000
Componente 2.- Gestión del cambio para la implementación de la gestión judicial a través de medios electrónicos	97.000	0	97.000
Componente 3.- Evaluación, difusión y retroalimentación de resultados	60.000	0	60.000
TOTAL:	250.000	0	250.000

- 3.5 Para mayor información ver [presupuesto detallado](#).

IV. Agencia ejecutora y estructura de ejecución

- 4.1 La CT será ejecutada directamente por el Banco a través de la Representación en Ecuador a solicitud del Gobierno por diversos factores institucionales inherentes al proceso de aprobación y ejecución de cooperaciones técnicas en el Estado Ecuatoriano que pueden resultar en demoras significativas, las cuales podrían tener un impacto en los tiempos previstos para ejecutar el proyecto que son críticos para alcanzar los objetivos planteados por la necesidad de iniciar cuanto

antes las actividades de esta CT, que constituyen factores críticos de éxito de necesidad inmediata para la introducción exitosa de medios electrónicos en la gestión judicial, tal como se describe en los antecedentes. Se contará con el apoyo del CJ en la preparación de los Términos de Referencia y en la supervisión técnica. Se contratará a un personal de apoyo para acelerar la ejecución de la CT.

- 4.2 **Adquisiciones.** El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. La contratación de consultores estará en concordancia con las políticas y procedimientos de recursos humanos (AM-650, fuerza de trabajo complementaria) y la Política para la Selección y Contratación de empresas consultoras para trabajo operativo ejecutado por el Banco, (GN-2765-1).
- 4.3 La CT financiará la realización de una evaluación de impacto de la introducción del expediente electrónico y como éste ha afectado la transparencia y la rapidez en la administración de justicia.

V. Riesgos importantes

- 5.1 El riesgo principal radica en las dificultades de coordinación entre las entidades que componen el sistema de administración de justicia y seguridad. Dado que algunas de ellas son autónomas, podrían optar por no adoptar los estándares definidos por este ejercicio liderado por el CJ. Se plantean las siguientes actividades: (i) incluir en el diagnóstico de la situación de interoperabilidad financiado en el componente 1, evidencia de restricciones en la coordinación interinstitucional que limitan la interoperabilidad; (ii) difundir en las diferentes entidades de la importancia y urgencia de adoptar estándares comunes de interoperabilidad en el sector, la cual se hará al más alto nivel en el marco del mecanismo de coordinación de la Mesa de Justicia, liderado por el CJ; y (iii) a fin de reforzar la apropiación de los resultados, el Gerente del Proyecto incluirá en la planificación de detalle del proyecto todas las actividades que deriven en el adecuado diseño del bus de servicios, las cuales serán puestas en conocimiento de las otras entidades en el marco de la Mesa de Justicia para su implementación.

VI. Salvaguardias Ambientales

- 6.1 No existen riesgos ambientales o sociales asociados con las actividades planteadas en esta operación de acuerdo a las "*Environmental and Safeguards Compliance Guidelines*" (OP-703), por lo cual la operación se clasifica como categoría "C".

Anexos Requeridos:

- Anexo I: [Solicitud del cliente](#)
- Anexo II: [Matriz de Resultados](#)
- Anexo III: [Términos de Referencia](#)
- Anexo IV: [Plan de Adquisiciones](#)